



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis

**Restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia
como alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal
peruano**

Autor

Bach. Villanueva Diaz Luis Alberto

Asesor

Mag. Vargas Rodríguez Cesar

Para optar el título profesional de Abogado

Fecha de sustentación: 29 de diciembre del 2023

Lambayeque, 2023

Tesis: “Restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia como alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano”
presentado para optar el título profesional de Abogado por:

Bach. Villanueva Diaz Luis Alberto

Autor

Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

Asesor

Aprobada por:

Mag. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado
DR. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO

Secretario de Jurado

Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

A mi madre María Antonia, por
guiarme en todo momento y ser la luz que
ilumina mi vida.

Agradecimiento

Agradezco a Dios, todopoderoso y a todas aquellas personas que me apoyaron en la realización de la presente tesis, en especial a mi asesor de tesis por su empatía y solidaridad con mi persona.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 53-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Luis Alberto Villanueva Díaz.**

Siendo las 4:00 p.m. del día viernes 29 de diciembre del 2023 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: " **RESTRICCIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN ETAPA INTERMEDIA COMO ALTERACIÓN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN EL PROCESO PENAL PERUANO**", designados por Resolución N° 144-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 14 de abril del 2023, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.**

SECRETARIO : Dr. **FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO.**

VOCAL : Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**

La tesis fue asesorada por Abog. **CESAR VARGAS RODRIGUEZ**, nombrada por Resolución N°144-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 14 de abril del 2023.

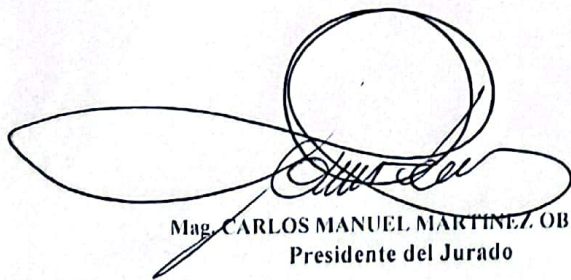
El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°626-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 22 de diciembre del 2023.

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Luis Alberto Villanueva Díaz** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO** con la nota de 17 (Diecisiete) en la escala vigesimal, mención de BURNO.

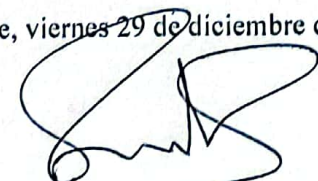
Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 5 :00 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 29 de diciembre del 2023



Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**
Presidente del Jurado



Dr. **FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO**
Secretario del Jurado



Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Luis Alberto Villanueva Diaz, Titulada RESTRICCIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN ETAPA INTERMEDIA COMO ALTERACIÓN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN EL PROCESO PENAL PERUANO, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 17% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.


El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 24 de noviembre del 2023



Abog. CÉSAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 16484422

ASESOR



Bach. Luis Alberto Villanueva Diaz
DNI: 41058061
Autor

Restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia como alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano

INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	18%	7%	6%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	5%
2	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	1library.co Fuente de Internet	1%
6	repositorio.unap.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unsa.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1%


Abog. CÉSAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 16484422
ASESOR

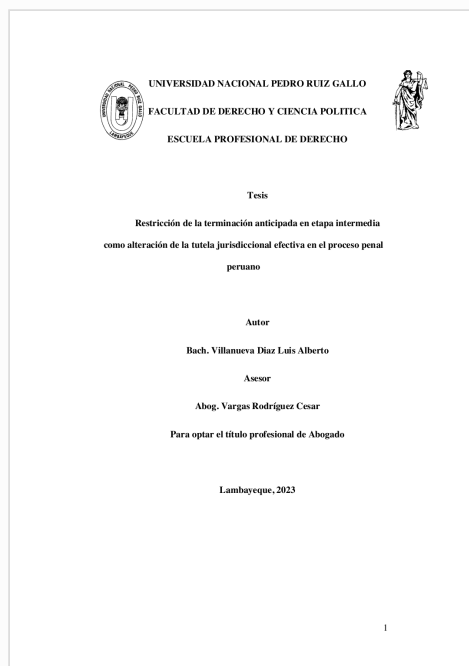


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	Luis Alberto Villanueva Diaz
Título del ejercicio:	Quick Submit
Título de la entrega:	Restricción de la terminación anticipada en etapa intermedi...
Nombre del archivo:	TESIS_VILLANUEVA_DIAZ_LUIS_ALBERTO.docx
Tamaño del archivo:	522.63K
Total páginas:	94
Total de palabras:	16,305
Total de caracteres:	87,240
Fecha de entrega:	24-nov.-2023 08:00p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre...	2237689043



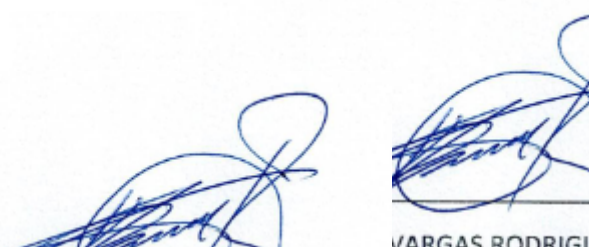
Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.



Abog. CÉSAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 16434422
ASESOR

Índice general

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice general	v
Índice de tablas	ix
Resumen	x
Abstract	xi
Introducción	12
Capítulo I.....	16
Los aspectos de la metodología de investigación.....	16
1.1. Planteamiento del problema	16
1.2. Formulación del problema	17
1.3. Justificación de la investigación.....	18
1.4. Importancia de la investigación.....	19
1.5. Objetivos de la investigación	19
1.5.1. Objetivo general	19
1.5.2. Objetivos específicos.....	20
1.6. Hipótesis.....	20
1.7. Variables.....	20



VARGAS RODRIGUEZ

1.7.1. Variable independiente.....	20
1.7.2. Variable dependiente.....	20
1.8. Los métodos aplicados en la investigación	21
1.8.1. Aplicación del método de interpretación jurídica exegetica ...	21
1.8.2. Aplicación del método de interpretación jurídica sistemática	21
Capítulo II	23
La terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal	23
2.1. Los trabajos previos a la investigación	24
2.2. La etapa intermedia en el proceso penal	26
2.3. La terminación anticipada	27
2.4. La terminación anticipada en el proceso penal	30
Capítulo III	32
Tutela jurisdiccional efectiva y el control del proceso penal	32
3.1. La tutela jurisdiccional efectiva	33
3.2. El proceso penal y su control	35
Capítulo IV	37
Análisis de los resultados	37
4.1. La unidad de análisis	37
4.2. Resultados obtenidos de la evaluación de los expedientes judiciales	38
4.3. Resultados obtenidos de la evaluación de la realidad estadística...	52

Capítulo V	55
Contrastación de la hipótesis.....	55
5.1. Discusión de los resultados	56
5.1.1. Discusión del objetivo específico “Desarrollar teóricamente los fundamentos jurídicos para la terminación anticipada durante la etapa intermedia en el ordenamiento procesal penal”	56
5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Estudiar el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva como parte del control del proceso penal peruano”	69
5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la realidad jurisdiccional respecto a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en las investigaciones penales del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo”	73
5.2. Validación de las variables:.....	78
5.2.1. Validación de la variable independiente: “La restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia”	78
5.2.2. Validación de la variable dependiente: “La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano”	80
5.3. Contrastación de la hipótesis.....	83
5.3.1. Determinación final:.....	83
Conclusiones	84
Conclusión general	84

Conclusiones específicas.....	84
Recomendaciones.....	86
Bibliografía.....	87
Anexos.....	91

Índice de tablas

<u>Tabla 1: tabla de evaluación de los expedientes judiciales con la aplicación de la terminación anticipada para revisar su efectividad procesal.</u>	38
<u>Tabla 2: cuadro de contrastación de hipótesis</u>	82

Resumen

Habiéndose comprendido la necesidad de revisar el efecto que produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia sobre la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano, se ha construido un esquema de investigación para alcanzar dicha meta, el cual se basa en la aplicación de métodos de análisis interpretativo de las reglas. La aplicación de este método permitió revisar de manera adecuada el contenido del artículo 468 del Código Procesal Penal con el fin de encontrar además de su sentido y naturaleza jurídica el verdadero alcance de su aplicación.

Como tal la restricción observada en el artículo antes mencionado, opera sobre la terminación anticipada, dejando de lado una posibilidad importante de cumplir la tutela jurisdiccional al acceder a la terminación anticipada incluso en el lapso de revisión que implica la etapa intermedia. Vale decir que la propuesta ha promovido la revisión de los aspectos teóricos que fundan las justificaciones jurídicas que validaría la posibilidad de establecer una terminación anticipada incoada en el proceso penal durante la etapa intermedia limitándose a la audiencia de control de acusación.

Se proyecta el acomodo legislativo que operaría en sus efectos de manera directa sobre el desarrollo jurisdiccional, puesto que la oportunidad estará taxativamente plasmada en el ordenamiento, liberando la posibilidad de que se produzca en la etapa intermedia, hasta el momento en que se da inicio a la audiencia de control de acusación, con lo cual se estaría logrando una acumulación de seguridad jurídica, además del adecuado control de la celeridad y economía procesal como principios generales.

Palabras clave: Terminación anticipada, Etapa intermedia, Tutela jurisdiccional efectiva, Proceso penal.

Abstract

Having understood the need to review the effect produced by the restriction of early termination in the intermediate stage on effective jurisdictional protection in the Peruvian criminal process, a research scheme has been constructed to achieve said goal, which is based on the application of methods of interpretive analysis of the rules. The application of this method allowed us to adequately review the content of article 468 of the Criminal Procedure Code in order to find, in addition to its meaning and legal nature, the true scope of its application.

As such, the restriction observed in the aforementioned article operates on early termination, leaving aside an important possibility of complying with jurisdictional protection by accessing early termination even in the review period involved in the intermediate stage. It is worth saying that the proposal has promoted the review of the theoretical aspects that underlie the legal justifications that would validate the possibility of establishing an early termination initiated in the criminal process during the intermediate stage, limiting itself to the accusation control hearing.

The legislative accommodation is projected that would operate in its effects directly on the jurisdictional development, since the opportunity will be expressly reflected in the ordinance, releasing the possibility that it is produced in the intermediate stage, until the moment in which the process begins. the accusation control hearing, with which an accumulation of legal certainty would be achieved, in addition to the adequate control of procedural speed and economy as general principles.

Keywords: Early termination, Intermediate stage, Effective jurisdictional protection, Criminal process.

Introducción

Se ha consignado el título para la tesis como “Restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia como alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano”, tiene su origen o inspiración en el decurso de la experiencia procesal, dado que se aprecia de manera constante que la fase de la etapa intermedia resulta un espacio de mero tránsito que controla la formalidad y viabilidad de la acusación fiscal. Precisamente por tal condición es que se hace posible la aplicación de una figura tan trascendente en el campo de la justicia penal negociada, referida a un mecanismo de la justicia penal negociada que termina con el proceso penal de forma anticipada.

Como tal para el diseño de la contrastación de la hipótesis planteada en esta investigación se ha tenido en cuenta de manera inicial la observación de la teoría necesaria que respalda la posibilidad de ampliar el ámbito de acción de la terminación anticipada hacia la etapa intermedia del proceso penal, lo cual ha servido de base para la selección del material de análisis, el mismo que en la realidad jurisdiccional ha permitido ver el nivel de eficacia que se produce en el proceso penal respecto a la aplicación de la terminación anticipada.

Es así como en el capítulo primero de la investigación se ha considerado el desarrollo de la realidad problemática que plasma la condición de eficacia que representa el aplicar la terminación anticipada y sobre todo el hecho de que en su contexto tanto procesal, así como teórico no se verifica ningún elemento que

condicione su aplicación solo a una parte del proceso penal. Por tal razón se sugiere cuestionar la realidad mediante una pregunta la cual se plasma así: ¿Qué efecto produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia como alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano?

Sobre este cuestionamiento se ha podido elucubrar un resultado previo que se indica bajo la siguiente hipótesis: La restricción para aplicar la terminación anticipada en etapa intermedia produce alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano.

Para lograr contrastar este planteamiento se desarrollaron metas tanto desde la perspectiva general como es: Determinar el efecto que produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia sobre la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano; así también los objetivos específicos que indican: Desarrollar teóricamente los fundamentos jurídicos para la terminación anticipada durante la etapa intermedia en el ordenamiento procesal penal; Estudiar el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva como parte del control del proceso penal peruano; Analizar la realidad jurisdiccional respecto a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en las investigaciones penales del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo

A partir del segundo capítulo sobre la base de las primera meta específica se desarrollan los fundamentos teóricos que permiten discutir sobre el sentido de la

terminación anticipada con lo cual se observa la posibilidad de plantear su ampliación para ser aplicada en la etapa intermedia; estas circunstancias jurídicas se ven reforzadas con el amparo de la garantía del acceso a la justicia que otorga la tutela en el proceso penal, además del control que deben ejercer los principios de celeridad y economía procesal destinados a mejorar el servicio del sistema de justicia; básicamente todo ello es lo que fundamenta la eficacia de la aplicación de la terminación anticipada en el ámbito de acción de la etapa intermedia.

Luego en el desarrollo del capítulo tercero se verifica la aplicación del segundo objetivo específico que trata de revisar el contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el ámbito procesal penal, sobre todo en el sentido de permitir el acceso a la justicia, que en este caso estaría representado por la posibilidad del imputado o las partes de acceder a la facilidad que otorga la justicia penal negociada a través del acuerdo que promueve la terminación anticipada. Queda claro que la aplicación del control principista en función a la tutela se convierte en el principal motor que impulsa la propuesta de ampliar los efectos de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal.

En base a toda esta construcción teórica se ha podido recurrir a la data registrada en los bancos estadísticos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Lambayeque, en cuyos documentos llegó a verificarse la manera en que se configura este mecanismo que permite terminar anticipadamente el proceso penal, para saber si resulta eficaz en su finalidad, y que en el desarrollo generado

jurisdiccionalmente no se aprecia ningún elemento que lo desvincule o la haga incompatible con la etapa intermedia, que más bien cabe la posibilidad de acceder a este mecanismo en razón de la necesidad de otorgar celeridad y economía en el uso de los actos procedimentales.

Por último, el desarrollo de la contrastación de la hipótesis ha incluido la primera parte destinada a la discusión de cada uno de los objetivos específicos en tanto sus resultados son de apoyo para la adopción de las posturas pertinentes, partiendo desde los trabajos previos o antecedentes de la investigación. Seguidamente la validación de las variables han sido los razonamientos que unidos permitieron construir una determinación final, según lo que se ha generado cada determinación a la que ha llegado la investigación científica que resultan de las metas específicas y generales trazadas inicialmente en esta tesis en tanto propuesta de cambio para solucionar el problema reconocido en la investigación.

El autor.

Capítulo I

Los aspectos de la metodología de investigación

La ejecución de la tesis depende del diseño que se plantea inicialmente, todo este esquema tiene su punto de partida en el planteamiento de la investigación, el mismo que está diseñado con la participación de conceptos que definen de manera abstracta tanto el origen de la problemática, así como el efecto o la consecuencia que se estaría produciendo por dicha falencia, elementos que se constituyen como las variables que dan el punto de partida a la tesis y sus razonamientos. En este caso se verifica que la restricción para aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal tendría efectos negativos sobre el control garantista de la tutela jurisdiccional efectiva que debería asistir de manera igualitaria a todas las partes procesales, más aún si es que se ha logrado el consenso que no solo solucione el conflicto de intereses, sino que también puede tener efectos sobre la reducción de las etapas del proceso penal.

1.1. Planteamiento del problema

La realidad jurisdiccional respecto al desarrollo de los procesos penales permite evidenciar una situación de ineficacia de los principios generales como es el caso de la tutela jurisdiccional efectiva como herramientas de control en el proceso penal. Ello debido a ciertas restricciones establecidas en el ordenamiento procesal

penal, como limitantes a la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia.

Esta circunstancia procesal se advierte como una medida sin contemplación de la posibilidad de acortar el desarrollo tal vez innecesario de un proceso penal tan largo y tedioso, sobre todo cuando se tiene la certeza de que existe un acuerdo respecto a la pena y al aspecto civil que corresponde a la lesión; tal situación en la actualidad conlleva a la necesidad del justiciable para esperar a que se verifique dicho acuerdo al nivel de la sentencia, lo cual no solo restringe la acción de la tutela jurisdiccional efectiva, sino también respecto a la condición de celeridad y economía procesal necesaria para viabilizar un proceso penal eficiente y sobre todo garantista.

Es por tales razones que la tesis en desarrollo se ha inclinado sobre acciones verificadoras respecto a las condiciones teóricas que permitan fundamentar una propuesta que solucione este límite procesal innecesario, para lo cual también se habrá de revisar la incidencia de casos en los que a nivel de sentencia se verifica la existencia de un acuerdo preexistente sobre la pena y el carácter civil del efecto del delito.

1.2. Formulación del problema

¿Qué efecto produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia como alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano?

1.3. Justificación de la investigación

En cuanto a la justificación del estudio se entiende que son razones que invitan al desarrollo del proyecto de investigación en tanto lo hacen entender como necesario, en este primer momento se indica que existe una justificación de tipo social, ello en tanto que las circunstancias sociales, en tanto necesidades atendibles por el derecho, requieren la participación del sistema de justicia para lograr condiciones de paz social. Esta intervención de la organización de justicia en el Perú, tiene por finalidad garantizar el bienestar de la sociedad en el rubro de la seguridad ciudadana, ello en tanto que el esquema social permite establecer este tipo de garantías y en virtud de lo cual se pretende desarrollar esta temática en tanto que la efectividad del proceso penal implica mejor protección de la garantía antes mencionada.

También es adecuado indicar como justificación de tipo jurídica y en específico procesal, el hecho de que las condiciones en que se desarrolla la actividad de investigación penal no resultan completas desde la perspectiva de acceso a la economía procesal que van de la mano con los beneficios que se incorporan el nuevo proceso penal como mecanismos de terminación anticipada de los procesos. Esta condición resulta en virtud de la imposibilidad de acceder a la terminación anticipada a nivel de la etapa intermedia de la investigación penal.

Es por ello que esta investigación ha tomado como eje de análisis, aquellos factores que estarían determinando la limitación antes mencionada, para resolver su

viabilidad, esto es si realmente resultan adecuados como límites, o si por el contrario resultaría útil la anulación de estas condiciones restrictivas, para con ello lograr mayor eficacia en el desarrollo del proceso penal, dotando de esta posibilidad garantista en la etapa intermedia y alcanzando con ello un mejor desempeño de la economía procesal y la oportunidad en el esquema de investigación penal.

1.4. Importancia de la investigación

El nivel de importancia de la investigación propuesta se ha medido en razón de los resultados que se han de obtener, se presume pues que la identificación del nivel de viabilidad jurídica de los factores que limitan o restringen la aplicación de la terminación anticipada en la fase intermedia de los procesos penales, señalaría la posibilidad de ampliar este ejercicio jurisdiccional a fin de que sea adoptada incluso en esta etapa del proceso, con lo cual se logrará mayor efectividad del mismo y condiciones más garantistas para las partes intervinientes en el proceso penal, las mismas que se convierten en los beneficiarios directos de estos resultados y también es trascendente señalar que la importancia radica que se trata de un beneficio de tipo general, puesto que otorga mayor seguridad ciudadana a toda la sociedad.

1.5. Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general

- Determinar el efecto que produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia sobre la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano.

1.5.2. Objetivos específicos

- Desarrollar teóricamente los fundamentos jurídicos para la terminación anticipada durante la etapa intermedia en el ordenamiento procesal penal.
- Estudiar el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva como parte del control del proceso penal peruano.
- Analizar la realidad jurisdiccional respecto a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en las investigaciones penales del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo.

1.6. Hipótesis

La restricción para aplicar la terminación anticipada en etapa intermedia produce alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano.

1.7. Variables

1.7.1. Variable independiente

La restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia.

1.7.2. Variable dependiente

La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano.

1.8. Los métodos aplicados en la investigación

Con respecto a la aplicación de métodos de investigación se ha tenido en cuenta la existencia de pautas de interpretación necesarias con el fin de reconocer el verdadero sentido de las normas que implican en este caso la restricción de la aplicación de la terminación anticipada en la etapa procesal intermedia, por lo mismo que se ha generado en razón del diseño de la contrastación de la hipótesis y se presenta a continuación.

1.8.1. Aplicación del método de interpretación jurídica exegética

Se ha seleccionado este tipo de análisis metódico con el fin de establecer o reconocer el verdadero sentido de la regla que limita o restringe la aplicación de la terminación anticipada en el espacio de la etapa intermedia, lo cual permitió verificar que pese a no estar indicada de manera taxativa la restricción sobre esta etapa, la limita condicionando que deba ser solamente en una fase previa contenida en la investigación preparatoria.

1.8.2. Aplicación del método de interpretación jurídica sistemática

El contenido de las reglas es importante por el sentido de protección o control que ejercen, pero requieren de la verificación sistemática de tal función, esto en tanto que la interpretación a este nivel puede establecer razones puntuales de convergencia con el ordenamiento constitucional; esto quiere decir que el artículo 468 del Código Procesal Penal, debe estar coherentemente enlazado con la

protección que otorga la constitución a las partes procesales, sobre todo en el campo de garantismo que asegura los derechos fundamentales del imputado.

Capítulo II

La terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal

Como parte del desarrollo de las metas específicas trazadas para esta tesis se tiene aquella que se encargará de establecer los fundamentos de la terminación anticipada con el fin de verificar las bases jurídicas de su viabilidad, lo cual conllevará a establecer si existen razones de limitarla a una sola fase del proceso, o también si resulta posible establecerla en un espacio más ampliado procesalmente, esto es en la etapa intermedia.

Cabe indicar también que en esta secuencia de revisión teórica se considera parte trascendental la participación de los trabajos previos que son parte del primer punto de análisis, el mismo que incorpora las tesis desarrolladas de manera previa, para reconocer el nivel de percepción que se tiene sobre el problema planteado, particularmente se verifica la existencia de una revisión directa de la opinión jurisdiccional pero no aplica efectivamente un cambio de esquema que corresponde como ampliación de esta figura que termina anticipadamente con el proceso penal para que pueda desarrollarse también en la fase intermedia.

2.1. Los trabajos previos a la investigación

Al regirse por un orden cronológico se tiene en primer lugar la tesis de Gutiérrez (2019), que lleva por título “La aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano”, presentada para la obtención del grado de maestro en derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, tesis que hace referencia a la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal. Entre sus conclusiones determina que:

Es indudable la viabilidad de aplicar la terminación anticipada como mecanismo de simplificación procesal “(...) en la fase intermedia del proceso penal, toda vez que la comunidad jurídica considera que esta herramienta legal coadyuva al descongestionamiento procesal y a su vez evidencia el sentir de los principios jurídicos del nuevo sistema procesal penal”. (pág. 84)

Por su parte, el maestro Hilazaca (2019) en su tesis doctoral La terminación anticipada como mecanismo de solución de conflictos y acceso a la tutela procesal efectiva, en la etapa intermedia, Arequipa, 2017-2018, acerca de la terminación anticipada en la fase intermedia, concluye:

Se entiende que la legislación punitiva en el Perú tiene en cuenta como pauta el hecho de la incoación del mecanismo que termina con el proceso anticipadamente lo cual se ha de dar sobre determinado espacio procesal, que se refiere a la fase previa a que se formalice la investigación a nivel preparatorio, que debe considerarse incluso como limitación la formulación de la acusación de parte del

Ministerio Público. Debe entenderse ello como una restricción que limita la aplicación de este mecanismo procesal de terminación anticipada, en tanto que se respalda en la legalidad como principio que opera en el proceso penal. Pese a ello la interpretación que pudiera desarrollarse de manera exegética o literal, conlleva a la controversia que ataca frontalmente a la garantía de seguridad de la tutela efectiva en el ámbito jurisdiccional, que en base al garantismo penal debe ser atendido de manera obligatoria. Tal restricción opera un efecto negativo en tanto que exista de manera antelada el consenso producido ente el agente delictivo y la víctima, esto es la aplicación de la justicia negociada, que conlleva a un mejor tratamiento del caso jurídicamente hablando. (pág. 94)

De otro lado, tenemos la investigación de Lama (2020), quien en su tesis titulada “La terminación anticipada en la etapa intermedia: una reforma necesaria”, que ha sido ejecutada con el fin de obtener el título de Abogado por la Universidad Nacional de Piura, la misma que se ocupa de aclarar ciertos aspectos y sobre todo destaca:

“El proceso especial de terminación anticipada constituye un mecanismo consensual de solución del conflicto jurídico penal, alternativo y hasta preferente por su rapidez y eficiencia a la solución tradicional de la sentencia condenatoria en juicio público y contradictorio (...); lo cual en atención a las condiciones fundamentales de los derechos de las partes y sobre todo del inculpado conlleva a su resolución en directo cumplimiento del plazo que razonablemente se ha impuesto en el proceso penal, por lo mismo que bien podría admitirse su incoación en la fase

intermedia del desarrollo del proceso que busca reconocer la responsabilidad penal del imputado. (pág. 75)

2.2. La etapa intermedia en el proceso penal

De acuerdo a la estructura de la investigación penal que se ha diseñado en el Código del año 2004 se tienen a la esta etapa intermedia como una formal institución que resulta importante en tanto que se procura en ella sanear el proceso o la razón que origina los actos para investigar el origen del delito, lo cual ha sido revisado en la investigación preparatoria. Precisamente la finalidad será la corroboración de los actos realizados en el momento anterior si han sido correcto y en línea con un sistema acusatorio, con todo ello se pretende establecer si corresponde o no atender el caso en el juicio oral correspondiente. (Principe, 2009)

A nivel de la evaluación del derecho comparado es posible reconocer una dupla de formas que estructuran a la fase intermedia en el proceso penal, lo cual se vincula con la finalidad de conocer la verdad en la investigación; es así que se tiene en primer lugar al “modelo de fase intermedia preparatoria” así como también en segundo lugar al “modelo de la Fase intermedia decisoria o decisional”. Esto realmente resulta útil en la determinación de la naturaleza que jurídicamente se le atribuye a la fase intermedia de la investigación penal puesto que incorpora una estructura diseñada con la especificación puntual de atribuciones y facultades de cada uno de los participantes en el proceso penal. (Vera, 2017)

Es importante esta fase de la investigación en tanto se producen efectos de filtro respecto a la actuación procesal desarrollada hasta el momento en que se produce dicha etapa, esto principalmente basado en la actuación de la economía procesal como principio de control durante la ejecución procesal penal, promoviendo la participación de una figura como el acuerdo probatorio o la convención probatoria como se le conoce en el proceso penal peruano, lo cual tiene la finalidad de trasladar al juicio únicamente los elementos que constituyen debate para la discusión correspondiente en tanto constituyan aspectos de controversia por resolver; desde luego estas circunstancias de controversia deberán estar basados en situaciones como un antecedente de investigación. (Sanchez & Zapata, 2022)

2.3. La terminación anticipada

El proceso especial de terminación anticipada se encuentra regulado en los Arts. 468-471 del ordenamiento procesal penal vigente, en el cual el imputado y/o el fiscal solicitan al juez de la investigación preparatoria la conclusión del proceso, previamente habiendo reconocido el imputado el ilícito o los cargos que se le imputan, como resultado el juez reducirá la pena hasta en una sexta parte.

Es decir, la persona que está siendo investigada por la presunta comisión de un delito, se pone de acuerdo con el fiscal que es el representante del Ministerio Público y acuden ante el juez de la investigación preparatoria con la finalidad de llegar a este proceso penal especial, y va a tener como beneficio la reducción de la pena.

Se dice que la terminación anticipada obedece a razones de política criminal que busca descongestionar el sistema, es decir, la política criminal siempre ha buscado en cierta forma reducir los marcos de criminalidad y en el ámbito del sistema procesal penal ha buscado que los procesos penales no retarden, o no se brinde la tutela jurisdiccional efectiva por un plazo irrazonable o excesivo. Por lo tanto, “la terminación anticipada descongestiona el juicio porque permite que el imputado ponga fin al proceso penal evitando estadios procesales como la etapa intermedia y la etapa de juicio oral”. (Cruz, 2021, s/p)

Sobre la oportunidad de incoar la terminación anticipada, según el Código Procesal Penal se puede instar desde que se formaliza la investigación preparatoria (Art. 336) y hasta antes de formularse la acusación fiscal (Arts. 343.3 y 349). Esto quiere decir que normativamente la terminación anticipada se puede solicitar dentro de la etapa de la investigación preparatoria.

Los jueces supremos en lo penal se han pronunciado en el Acuerdo Plenario N° 05-2008-CJ-116, estableciendo que no se podría incorporar la terminación anticipada en la etapa intermedia porque se desnaturalizaría tanto la propia regulación en el ordenamiento procesal penal, así como también su naturaleza jurídica.

Entre sus fundamentos exponen una manera mediante la cual es presentado el requerimiento para aplicación de esta figura jurídica como proceso especial para ser recepcionado incluso en la fase intermedia de los procesos penales comunes, lo cual

se presume atacaría la propia naturaleza de las reglas contenidas en el ordenamiento jurídico y además tergiversaría el espacio que ocupa en el desarrollo de la estrategia procesal peruana bajo el nuevo modelo garantista, destinado todo ello a reducir el tiempo del proceso y eliminar las fases que corresponden al proceso común, que van luego de la fase intermedia de la investigación hasta el enjuiciamiento.

Sin embargo, pese a haber considerado los jueces supremos en lo penal que lo que se busca con esta reducción de fases procesales anticipadamente “entre otros” lograr la descongestión de la cantidad de casos que duran un tiempo bastante amplio bajo atención en el sistema de justicia. Por ello restringir su aplicación como terminación anticipada en otra fase del proceso penal, conlleva a la anulación de la voluntad de las partes que han logrado arribar a un consenso para establecer un acuerdo que solucione el conflicto, esto es que la discusión de la investigación se produzca sobre esta realidad de consenso, prácticamente una discusión o tránsito procesal inválido.

Un punto importante a tener en consideración, es que la figura que termina con las primeras fases previas al juicio oral se fundamenta en la existencia de un acceso a la oportunidad que representa la justicia negociada y que desde luego conlleva a la materialización del control de los principios de economía procesal así como el de celeridad respecto a los plazos, siendo así resulta posible su requerimiento durante una fase distinta a la establecida procesalmente, sobre todo considerando que la finalidad de este mecanismo es desarrollar un proceso que se encuentre ceñido a las pautas específicas de un proceso adecuado y la protección

que jurisdiccionalmente ofrece el Estado a través de su sistema de justicia.
(Hilazaca, 2019, pág. 66)

2.4. La terminación anticipada en el proceso penal

Según la doctrina, este tipo de procedimiento especial desarrollado dentro de la estructura procesal tendrá lugar en una etapa posterior a la etapa de investigación preparatoria, lo cual debe entenderse a su injerencia o intervención en la parte del proceso penal en que se verifica la validez o conveniencia de la acusación fiscal antes de pasar a juicio oral; pese a ello, actualmente existe la restricción taxativa de la norma que deja en claro la existencia de un tema de injusticia o desigualdad que generar el hecho de limitar la aplicación de este proceso especial, que además altera el sentido de eficacia de la tutela judicial al limitar su acceso solo a un espacio procesal lo cual se produce como resultado interpretativo que de manera restrictiva sobre el derecho mismo, es realizada de parte de quienes administran el sistema jurídico, lo cual se refiere a la regla estrictamente del proceo que conduce el análisis de un hecho delictivo que se aplica al problema delincuencial. (Hilazaca, 2019, pág. 8)

En términos simples, la tutela jurisdiccional efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir una concepción genérica que engloba todo lo relacionado al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción; en ese sentido, todo juez está obligado a brindar tutela judicial efectiva.

Tutelar el derecho de acceso a la justicia implica el permitir el acceso al sistema de justicia lo cual se ha construido estratégicamente bajo a pauta de la tutela jurisdiccional la que se presume ha de ser efectiva para cumplir sus fines de garantía de derechos como son el debido proceso, la defensa , la predictibilidad del resultado de la investigación como lo que se plasma en la resolución final de sentencia, lo cual si consolidaría la garantía del derecho de las partes así como la legitimidad de sus intereses; esto es lo que limita la función estatal, limitando su poder para alcanzar así la garantía constitucional y seguridad jurídica sobre los derechos que corresponden a las partes del proceso, garantizando además condiciones de exclusividad para evitar las discriminaciones jurídicas en el tratamiento del proceso penal. (Araujo, 2011, pág. 268)

Capítulo III

Tutela jurisdiccional efectiva y el control del proceso penal

La estructura procesal penal se ha diseñado en base a las garantías que incorpora el control de los principios generales y procesales del derecho penal, lo cual conlleva a la idea de una estructura idónea para atender los casos conflictivos generados por la acción del delito. En esta secuencia de control se tiene en primer lugar a la tutela o protección que se presume otorga el sistema de justicia para que los que consideren necesario acudan a él para que sus derechos sean atendidos de manera idónea.

Este control en base a los principios incluyen diversos factores de revisión, es así que se muestra una secuencia de acciones que permiten acceder de la manera más simple y sobre todo en atención a la igualdad de condiciones que supone la existencia de mecanismos que permiten solucionar el conflicto originado, sobre todo según lo planteado por esta investigación a la tutela que debe asistir a las partes de acceder a la terminación anticipada antes de que se formalice la investigación, en tanto exista un consenso o acuerdo que beneficie a ambas partes en el conflicto.

3.1. La tutela jurisdiccional efectiva

Existen múltiples acepciones de lo que se puede o debe entender por tutela jurisdiccional efectiva, desde el punto de vista internacional se asume como un derecho con carácter fundamental que se debe incorporar en todos los ordenamientos constitucionales, esto es que forme parte de la estructura del derecho interno de cada país. Se advierte como una facultad amplia sin condiciones específicas que proporciona al sujeto de derecho la capacidad de elegir la forma o el canal de atención para el resguardo de su derecho o interés legítimo. (Martín, 2014)

La apreciación que se tiene desde la perspectiva constitucional que ofrece el análisis del Tribunal marca dos componentes de este derecho a la tutela con efectividad en el ámbito judicial, lo cual se reconoce desde la perspectiva del acceso al sistema de justicia que se compone de diferentes jurisdicciones, esto se constituye concretamente como el derecho a ocupar un espacio participando de alguno de los procesos, es decir acceder a la posibilidad de ser atendido mediante una decisión que se tome en la judicatura sobre el derecho que se discute o se pretende deducir, que desde luego debe cumplir con los requisitos exigidos por la judicatura. (Álvarez, 2014)

Como se puede apreciar del desarrollo de la tutela judicial como derecho, no se acaba únicamente en la fase del acceso al sistema de justicia, además de esa posibilidad, se hace necesario que los jueces que conforman dicho sistema se

pronuncien como corresponde con la respuesta respectiva a las pretensiones, ello a través de una correspondiente formulación de decisión que verse respecto al meollo del asunto discutido que independientemente del resultado positivo o negativo, represente una decisión razonada y que tal condición se plasme en el documento que la contiene. (Cubillo, 2018)

También es posible apreciar condiciones dentro del acceso a la tutela judicial efectiva, ello en tanto que en la realidad existen configuradas ciertas trabas que como barrera se ponen al frente de quienes deben acceder a este sistema, esto es que no existe una condición igualitaria para dicho acceso, puesto que algunos sujetos de derecho que se encuentran formando parte de la porción económica desfavorecida de la población, esto es que no pueden solventar los costos para asistir a un proceso, puesto que la contratación de abogados o expertos para hacer ver o demostrar su pretensión, tienen costos que superan sus posibilidades. (Ramírez, 2017)

Lo señalado supone la existencia de condiciones diversas incluso para acceder al sistema de justicia, lo cual se debe asumir en la necesidad de hacer prevalecer la igualdad ante la ley, esto es que resulta necesario establecer legislativamente pautas que controlen la jurisdiccionalidad para incorporar como meta de ejecución que permitan alcanzar materialmente tal igualdad, esto es que no se conforme la legislación con la formalidad de la igualdad, puesto que ambas deben estar componiendo la estructura de un Estado de derecho legal. Ello puede ser

alcanzado tranquilamente con la adecuada intervención de la judicatura, esto es que se comporte de manera idónea en el desarrollo de las actividades judiciales, lo cual sería ideal para la transformación del sistema de justicia incluso sin cambios normativos, pero resulta algo por demás subjetivo. (Martinez, 2021)

3.2. El proceso penal y su control

Cuando se habla de un proceso siempre se tiene la idea de una secuencia de actos destinados a obtener un fin determinante respecto de alguna pretensión que se discute y se ha traído al sistema de justicia para la solución respectiva, pero ello además debe tomar en consideración potestades como es el caso de las que se refieren a la punición que únicamente le corresponde al Estado. Esta acción debe asumir condiciones de control que se inclinan hacia la existencia de los principios de carácter constitucional, lo cual asegura que el proceso en el ámbito penal este vinculado con el sentido garantista que supone el orden constitucional lo cual implica la presencia y protección de los derechos fundamentales. (Landa, 2016)

Lo señalado implica una secuencia de procesos destinados a una finalidad, que para el caso del derecho penal inspira un proceso destinado a la búsqueda de la verdad como finalidad del mismo, esta ruta se inspira en la necesidad de reconocer elementos de control sobre la secuencia de procedimientos, sobre todo en el entendido caso de que lograr esta meta incorpora condiciones de racionalidad que dirija el discurso penal para lo cual se precisa que las decisiones sean correctamente motivadas con el fin de que el resultado tenga un sustento jurídico y fáctico válido.

Para tal fin debería considerarse la participación de premisas como “(...) justificación interna, sea la deducibilidad de las premisas, justificación externa normativa, esto es la corrección jurídica de las hipótesis planteadas y justificación externa probatoria, sea el establecimiento de los hechos”. (Zamora, 2014, pág. 178)

La estructura que diseña el proceso en el ámbito penal se compone con la participación de garantías que son derivadas de la normativa constitucional, cuya finalidad no solo se centra en brindar a las partes procesales un espacio seguro jurídicamente sino también en alcanzar un estado equilibrado de condiciones en la ruta de buscar la verdad bajo las condiciones materiales; esto quiere decir que el carácter fundamental de los derechos que le asisten al inculcado en el proceso penal se comportan como un límite a la intervención del ius puniendi estatal. (Caro, 2006)

Capítulo IV

Análisis de los resultados

4.1. La unidad de análisis

El desarrollo de la tesis compromete al investigador a la observación de la realidad, ello en tanto que se ha de reconocer en la realidad el efecto que se discute mediante la problemática planteada, tal es así que para este caso se plantea como población de análisis a los procesos penales en los que se desarrolla la terminación anticipada en los juzgados de investigación preparatoria de la ciudad de Chiclayo, ello en tanto que interesa la virtud de la aplicación de la terminación anticipada como proceso especial, por lo que conviene reconocer los factores positivos de la misma en la realidad jurisdiccional, con lo cual se logrará finalmente reconocer el efecto que produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia respecto a la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano.

Muestra: para la obtención de información respecto al efecto que produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia respecto a la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano se analizarán 10 expedientes judiciales tomados de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.

4.2. Resultados obtenidos de la evaluación de los expedientes judiciales

Tabla 1: tabla de evaluación de los expedientes judiciales con la aplicación de la terminación anticipada para revisar su efectividad procesal.

N° Expediente	Materia	Apreciación
1. 02193- 2023-0- 1706- JR-PE- 10°	Tráfico de influencias simuladas	<p>De la observación que se hace en esta resolución se verifica que el desarrollo de la actividad jurisdiccional se ocupa no solamente del contexto normativo que corresponde para respaldar la aplicación de la terminación anticipada como mecanismo para satisfacer otros principios como celeridad y economía procesal, sino también consolida un marco de traslación de las reglas a la realidad, esto es que la subsunción a los hechos fácticos se considera apropiada.</p> <p>En tal sentido se aprecia el aporte no solo de viabilidad de la figura jurídica de terminación</p>

		<p>anticipada sino que también se presenta como una herramienta de importancia en casos que son de recurrencia en el índice de comisión delictiva. Se prevé como tal un contexto de beneficio no solo para las partes además de que para el propio sistema de justicia puesto que no se dilata en el tiempo la observación de los casos que pueden ser reducidos en su atención para dar pase a casos de investigación más trascendente.</p> <p>Es importante además la indicación del aporte que proporciona la resolución de los conflictos sociales generados por el ilícito penal, en este caso la existencia del tráfico de influencias se destina mediante una terminación anticipada con la intención de propiciar la verdadera función de control que debe ejercer el derecho, como es</p>
--	--	--

		<p>el caso de la satisfacción de los intereses de las personas en función a la validación de los derechos que le corresponde.</p>
<p>2. 7580- 2020-4- 1706- JR-PE- 10°</p>	<p>Colusión</p>	<p>Teniendo en cuenta el delito que se discute en esta investigación resulta de mucha importancia la aplicación de la terminación anticipada como mecanismo procesal para resolver el conflicto suscitado; ello en tanto que la manera en que se desarrolla la actividad del sistema de justicia resulta lo suficientemente eficaz para alcanzar resultados concernientes a la eliminación de fases innecesarias de acuerdo a la secuencia de la investigación.</p> <p>Pese a lo indicado no se aprecia una condición o circunstancia especial que vaya más allá de la fase procesal como requisito para que se lleve a cabo</p>

		la coordinación de una terminación anticipada, esto es que no existe una justificación para limitarla solo a una fase, por lo que las circunstancias de ahorro procesal tanto en lo que se refiere a espacio de tiempo así como a la cantidad de actos procesales, puede surtir efecto en cualquiera de las fases de la investigación penal.
3. 02467-2022-0-1706-JR-PE-05	AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	En este caso donde se ha ventilado un problema que es recurrente en la realidad social, también se aprecia la correcta participación de la terminación anticipada, ello en la medida de que los elementos procesales se presentan como viables para su celebración, sobre todo en lo que respecta al acuerdo y que teniendo en cuenta el nivel de afectación que se produce sobre la víctima, el beneficio no podría ser tan amplio

		<p>para el imputado, por lo mismo que la reducción de la sanción solo opera en el límite de los cuatro meses, quedando así su efectividad en la ejecución por el periodo de un año y ocho meses.</p> <p>Cabe indicar de manera resaltada el hecho de que esta sanción efectiva que esta comprendida en el espacio de tiempo que representa la pena suspendida no es posible asumirla como tal, puesto que se ha establecido ya que para este tipo de delitos dentro de la violencia familiar la sanción se ejecuta fuera del marco de la suspensión.</p> <p>Como tal la sanción si ha merecido la atención de una conversión en el plano de las jornadas de prestación de servicios que se darán en la comunidad, para tal efecto se ha realizado el cálculo por lo que ha</p>
--	--	--

		<p>resultado en un total de 86 jornadas, así como la inhabilitación, lo cual representa de todos modos un cierto beneficio generado en conjunto a la terminación anticipada que es rescatable para orientar su postulación en otras etapas del proceso penal.</p>
<p>4. 02645- 2022-0- 1706- JR-PE- 05</p>	<p>COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO</p>	<p>La observación que se hace en este caso es la funcionalidad de la terminación anticipada en tanto que se aplica para casos en los que se puede configurar la reducción de la sanción penal. Esto implica la presencia de un criterio de justicia negociada que consolida parte del garantismo penal que debe ser considerado a fin de alcanzar efectividad del principio de economía procesal.</p> <p>La ventaja de la justicia negociada que se aprecia como</p>

		<p>resultado de la aplicación de terminación anticipada en este caso esta vinculada con la sanción que se plantea por debajo del mínimo sancionado en el tipo penal de cohecho activo, esto es que se reduce en un mes para alcanzar el beneficio que inspira la terminación del proceso, lo cual se plasma en la sentencia al señalar la reducción en un sexto del total de la pena concreta, quedando en tres años y nueve meses, con lo cual alcanza al parámetro de suspensión de la pena y el periodo de prueba de dos años con ciertas reglas de conducta.</p>
<p>5. 06334- 2022- 27- 1706- JR-PE- 10°</p>	<p>COBRO INDEBIDO</p>	<p>En el desarrollo de la segunda resolución se puede apreciar la sentencia por terminación anticipada, en el que concurren los elementos requeridos para establecer la viabilidad de la terminación como</p>

		<p>forma de culminar el proceso de investigación.</p> <p>Se logra establecer una sanción dentro del margen legal establecido reduciéndose en un sexto del mínimo punitivo que se configura en el tipo penal por haberse sometido a la figura de la terminación anticipada siendo un total de Diez meses de privación de libertad con efecto suspendido en la ejecución siendo el periodo de prueba de un año así como también la inhabilita por 4 años y 2 meses.</p> <p>De igual modo se ha establecido la reparación civil correspondiente, dejando en claro que se cubren aspectos no solo relacionados con la finalidad del proceso penal que es establecer responsabilidad en función de la verdad y consolidar además el carácter civil que coexiste en un</p>
--	--	--

		<p>proceso penal esto es la reparación civil que se ha planteado como exigible al imputado.</p> <p>Es importante además la configuración de este caso en tanto que muestra la efectividad de la terminación anticipada para el efecto del principio de economía procesal que se traduce en la reducción de etapas procesales o procedimientos, evitando así dilación en la investigación y menor costo al sistema de justicia y por ende al Estado.</p>
6. Exp. 07768- 2023-0- 1706- JR-PE- 05	PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	<p>Como quinto punto de la segunda resolución que declara fundado el requerimiento de proceso inmediato se produce la audiencia que conduce a la evaluación de los medios que permitieron la terminación anticipada, es así que se obtiene como resultado la sanción efectiva</p>

		que se aplica sobre la imputada alcanzando un total de 6 años y 8 meses de restricción de la libertad personal, así mismo la correspondiente sanción en días multa así como la reparación civil que alcanza cinco mil soles
7. 07926-2023-0-1706-JR-PE-05	HURTO AGRAVADO	<p>Se requiere proceso inmediato por parte del Ministerio Público, lo cual se resuelve en el acto resolutivo segundo de fecha trece de julio del año 2023, siendo resuelto como procedente.</p> <p>Luego se aprecia la presencia de un acto resolutivo en la que se determina la terminación anticipada en el mismo día, que atención a la simplificación procesal que opera en razón a este tipo de proceso especial basada en la oportunidad como un criterio procesal.</p> <p>El acuerdo al que se arriba hace que se le imponga una</p>

		<p>sanción de dos años y seis meses de sanción privativa de libertad bajo efecto suspendido; además plantea una reparación civil por quinientos soles a pagar en favor de la víctima imponiendo un plazo de cumplimiento.</p>
<p>8. 08108-2022-221706-JR-PE-05</p>	<p>RECEPTACIÓN AGRAVADA</p>	<p>En resolución de sentencia anticipada se aprueba el acuerdo al que se arribó entre el Ministerio Público y el imputado, imponiendo una sanción que alcanza los ocho años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva.</p> <p>Además se impone una sanción de cincuenta días multa en favor del Estado o su equivalente de cuatrocientos veintisiete soles con un plazo de cancelación; fijando un monto de reparación civil que será pagado por cuotas de 250 soles en favor del Estado hasta un total de mil soles.</p>

9. Exp. 2834- 2023- 43- 1706- JR-PE- 09	TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA	Se aprecia la sentencia de terminación anticipada de fecha ocho de junio del año 2023 en el que se aprueba el acuerdo de terminación anticipada al cual han llegado entre la parte fiscal y la imputada, condenando con una pena de dos años y seis meses de sanción privativa de libertad suspendida y un periodo de prueba de un año y seis meses.
10. Exp. 6116- 2022- 10- 1706- JR-PE- 09	EXTRACCIÓN ILEGAL DE ESPECIES ACUÁTICAS	Se verifica la sentencia de terminación anticipada de fecha cuatro de enero del año 2023, aprobándose el acuerdo de terminación anticipada generado con el Ministerio Público y el imputado imponiendo una condena de dos años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución con el plazo de un año de periodo de prueba con reglas de conducta. Además de una reparación civil de

		ochocientos soles a favor del Estado.
--	--	---------------------------------------

OBSERVACIÓN:

Ha de considerarse el hecho de que se ha recurrido a la institución jurisdiccional para solicitar el acceso a la información pública que comprende los expedientes judiciales, los cuales han permitido ubicar a la muestra planteada inicialmente y sobre ello desarrollar la observación de la realidad jurisdiccional. Esta labor se ha orientado al reconocimiento del criterio sobre la funcionalidad de la figura que se estudia en esta tesis y su efecto procesal que sustrae fases a fin de dar un pronto resultado del sistema de justicia.

Las labores de investigación se basan en la verificación de las circunstancias de la realidad que muestran la verdad con el fin de establecer una determinación sobre el nivel de responsabilidad de los imputados, en esta ruta se verifica condiciones de requerimiento social que conlleva a la creación de un marco que controle el ejercicio del poder punitivo. Esto último sería uno de los principales fundamentos para que sea incorporada la terminación anticipada como mecanismo que forma parte de la justicia negociada y que conlleva a un desarrollo procesal penal más célere.

Luego teniendo en cuenta que la función principal de esta investigación contiene la búsqueda de la verdad sobre la aplicación mecanizada que conlleva a

restricción sobre aquella terminación anticipada en etapa intermedia que tiene además un efecto jurídico sobre el propio esquema procesal peruano afectado la protección jurídica, ha sido preciso partir por el punto de observación sobre la eficacia que se denota al aplicar la terminación anticipada en el proceso penal. En tal sentido es que se ha podido recopilar las resoluciones que contienen las actas de control de acusación y la terminación anticipada que formulada adecuadamente como acuerdo debidamente consensuado logra su cometido.

Es apropiado indicar que la aplicación de la terminación anticipada genera un beneficio no solo procesal sino también de corte garantista, que se proyecta como una suerte de evitar el desarrollo innecesario de fases procesales que por las condiciones y circunstancias de cada caso pueden ser limitadas con el pase directo al juicio oral. Pese a ello se requiere de un adecuado control constitucional que estará a cargo de los principios, siendo así en torno a la tutela judicial como principio general incorpora otros mecanismos de control como el debido proceso que apertura la posibilidad de ejercer el derecho a esta justicia negociada en cualquiera de las fases del proceso penal, por lo mismo que la terminación anticipada podría tener una liberación de las restricciones establecidas a fin de que se pueda producir también hasta en la etapa intermedia.

4.3. Resultados obtenidos de la evaluación de la realidad estadística

Producción Judicial de Expedientes Principales y Cuadernos, sobre Sentencias de Terminación Anticipada en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la CSJLA																																	
db: Ene - Dic 2022																																	
DEPENDENCIA	SENTENCIAS												Total SENTENCIAS	CUADERNOS												Total CUADERNOS RESUELTOS							
	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC													ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
1. JUZGADO DE INVEST. PREPARATORIA-MBJ JLO	8	9	3	10	6	8	11	12	12	10	12	3	104	4	5	1	9	2	4	9	6	7	7	7	1	62							
1° JUZ. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED - 2	1	0	4	5	2	3	0	1	1	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1							
1° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2							
10° JUZG. INVEST. PREPA. ESP. DELITOS CORRUP. FUNCION	2	1	2	1	3	4	1	2	0	0	2	1	19	2	1	2	1	3	4	1	2	0	0	1	1	18							
2° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2							
2° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - JAEN	2	0	3	3	4	5	3	4	1	1	3	1	30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1							
2° JUZG. INVEST. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED-MBJ JLC	9	2	14	12	5	7	9	15	8	14	8	4	107	4	0	9	9	5	6	6	9	6	7	4	1	66							
3° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - CRIMEN OF	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3							
5° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	1	0	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	9	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6							
6° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	3	0	10	1	0	1	0	0	1	0	1	1	3	0	0	8							
7° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3							
8° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	1	1	8	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6							
9° JUZGADO INV. PREPARATORIA - DELITOS AD. TRIB. MCO	17	7	6	8	14	14	5	10	20	9	12	3	125	17	7	6	9	13	14	5	10	20	9	12	3	125							
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - Ferreñafe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - Lambayeque	1	0	0	1	0	0	2	4	0	0	2	0	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	5							
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - MBJ Motupe	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	6	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4							
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - SEDE CUTERVO	2	1	2	4	5	5	2	4	5	2	4	0	36	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5							
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - SEDE SAN IGNACIO	0	1	1	1	0	3	1	1	1	1	0	3	13	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	6							
JUZGADO INV. PREPARATORIA (AD. FUNC. DEL JPL) - CAYALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	46	22	42	45	49	54	44	54	52	46	53	18	525	32	16	22	31	25	35	26	31	36	26	33	10	323							
Fórmula: Of. Estadística CSJLA 17/08/2023																																	
: SU - Hitos Estadísticos - SIPE																																	

Producción Judicial de Expedientes Principales y Cuadernos, sobre Sentencias de Terminación Anticipada en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la CSJLA																											
do Ene - Jul 2023																											
DEPENDENCIA	SENTENCIAS													Total SENTENCIAS	CUADERNOS										Total CUADERNOS RESUELTOS		
	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC														ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
1. JUZGADO DE INVEST. PREPARATORIA-MBJ JLO	12	0	11	9	13	2	4						51	5	0	8	6	3	1	2					25		
1° JUZ. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED - 4	1	2	1	4	1	0							13	0	0	0	1	0	0					1			
1° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	0	1	1	0	1	1	1						5	0	0	1	0	0	0	0				1			
10° JUZG. INVEST. PREPA. ESP. DELITOS CORRUP. FUNCION	0	0	1	1	1	2	4						9	0	0	0	1	1	2	4				8			
2° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	0	0	0	0	0	0	2						2	0	0	0	0	0	1					1			
2° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - JAEN	9	0	4	3	2	1	0						19	1	0	0	0	0	0	0				1			
2° JUZG. INVEST. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED -MBJ JLC	10	9	3	6	9	10							56	4	6	5	2	2	2	3				24			
3° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	0	0	0	0	1	0	1						2	0	0	0	0	0	0	0				0			
4° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - CRIMEN OF	1	2	1	0	0	0	0						4	1	0	1	0	0	0	0				2			
5° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	1	1	0	0	0	0	2						4	0	0	0	0	0	0	0				0			
6° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	0	0	0	1	0	0	0						1	0	0	0	1	0	0	0				1			
7° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	0	0	0	2	2	1	5						10	0	0	0	2	2	1	4				9			
8° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEEI	0	0	0	1	2	0	0						3	0	0	0	1	0	0	0				1			
9° JUZGADO INV. PREPARATORIA - DELITOS AD. TRIB. MCDO	13	0	13	4	25	6	6						67	13	0	12	4	25	6	6				66			
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - Ferreñafe	1	0	0	0	0	0	0						1	0	0	0	0	0	0	0				0			
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - Lambayeque	0	0	1	0	0	0	0						1	0	0	0	0	0	0	0				0			
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - MBJ Motupe	1	0	1	0	4	0	1						7	1	0	1	0	1	0	1				4			
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - SEDE CUTERVO	4	1	2	3	3	5	3						21	1	1	1	0	2	1	0				6			
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - SEDE SAN IGNACIO	1	0	0	1	3	2	0						7	1	0	0	0	1	0	0				2			
TOTAL	57	15	46	29	67	30	39						283	27	7	29	17	38	13	21				152			
Fecha: 01-Ene-2023 CSJLA 17082023																											
: SU - Hitas Estadísticas - S de E																											

OBSERVACIÓN:

Según el material obtenido mediante una solicitud dirigida ante “oficina del Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque”, en la cual se verifica la incidencia de casos que se producen a nivel de resoluciones de terminación anticipada que son tratadas en cuadernos separados al proceso, dando como resultado de tal evaluación que se ha logrado sentenciar mediante esta modalidad un total de 525 casos por terminación anticipada entre los meses de enero a diciembre del año 2022.

Del mismo modo se ha podido verificar que la incidencia de casos que se producen a nivel de resoluciones de terminación anticipada que son tratadas en cuadernos separados al proceso, dando como resultado de tal evaluación que se ha logrado sentenciar mediante esta modalidad un total de 283 casos por terminación anticipada entre los meses de enero a junio del año 2023.

Capítulo V

Contrastación de la hipótesis

Según el diseño establecido como guía en la ejecución para esta tesis, se busca la determinación que plantea la meta de reconocer el nivel de efectividad de la terminación anticipada para resolver si la restricción para su aplicación en la etapa intermedia resulta adecuada o en su defecto estaría generando alteración a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto se constituye como un mecanismo que conlleva a la solución del conflicto.

Para tal tarea se diseñaron los objetivos o metas específicas que permitieron recopilar la información teórica y doctrinaria referida tanto sobre esta figura jurídica bajo estudio que produce materialización sobre la negociación en el proceso penal, así como del contenido esencial de la tutela jurisdiccional efectiva que tiene como destino asegurar las garantías que debe incorporar el proceso penal. Sobre este conocimiento es que se ha logrado reconocer la ausencia de razones que justifiquen la restricción planteada en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Conocimiento antes indicado que se ha planteado de manera crítica a fin de hacer prosperar la discusión jurídica, la cual ha tenido como resultado la determinación específica como posturas particulares en función a las metas

trazadas, lo cual implicó la revisión sintética de las mismas a fin de lograr reconocer la validez de las variables que les dieron origen. Es con tales resultados de razonamiento que se ha podido construir acciones que determinan finalmente, la misma ha sido contrastada frente al planteamiento inicial que representa la hipótesis, a fin de verificar su corroboración, la cual se plasma en un cuadro final como contrastación propiamente dicha.

5.1. Discusión de los resultados

5.1.1. Discusión del objetivo específico “Desarrollar teóricamente los fundamentos jurídicos para la terminación anticipada durante la etapa intermedia en el ordenamiento procesal penal”

Como es de notar este primer objetivo específico ha incorporado en su desarrollo la recopilación de los antecedentes de la investigación, los cuales han servido de guía al planteamiento, esto en tanto que permitieron verificar el nivel de conocimiento que se tiene en el campo académico sobre el tema de la terminación anticipada, sus límites, restricciones y eficacia plasmada en el proceso penal. Esto se ha desarrollado luego en la discusión inicial de la tesis, con el fin de que a través de la crítica constructiva se pueda establecer la ruta de análisis que debe seguir esta nueva investigación y con ello plantear una posible solución al problema.

Así se tiene la tesis que se ha desarrollado por Gutiérrez (2019), de la cual en función a las conclusiones y recomendaciones a las que arribó, puede hacerse la

siguiente pregunta ¿hasta qué momento es viable la aplicación de la terminación anticipada en la fase intermedia?

De acuerdo a lo planteado por el investigador Gutiérrez, existe una posibilidad de contemplar de manera más amplia la utilización del mecanismo procesal de terminación anticipada, basándose en el argumento ideal que consiste en descongestionar el proceso penal, lo cual sin duda representa la participación de principios generales y que se sumen también en el ámbito procesal con atención del debido proceso, esto es la economía y celeridad procesal.

Respecto a ello es importante considerar que el proceso penal se ha diseñado bajo la estructura marcada por etapas, así cada una de las tres que lo integran poseen autonomía procesal, es decir que se manejan bajo sus propias pautas y que la forma en que se desarrolla depende de quienes participan en ella, tan es así que las decisiones adoptadas tienen el carácter de autonomía, por lo mismo que únicamente pueden ser cambiadas mediante la verificación de nulidades según lo que establece la normativa procesal.

Esta secuencia de actos en cada una de sus fases representa la acción del sistema de justicia que se desarrolla en razón de las potestades otorgadas por el Estado a través del órgano de Poder Judicial, que como tal una porción importante de poder será la que se encuentra en actividad y bajo la decisión de funcionarios que ostentan dicha potestad. Esta indicación es lo que justifica la acción del propio

Estado para promover el control de dichas actividades, por lo mismo que se aplica para tal fin los principios destinados a vigilar la correcta aplicación del derecho en este tipo de procesos.

Sobre esta fase de control que le asiste al proceso penal, se entiende existe un efecto de vigilancia sobre cada una de las actividades, por lo mismo que parte de esta acción controladora la asumen además de los principios, algunas figuras jurídicas planteadas con la intención de aliviar no solo la congestión y rapidez del proceso penal, sino también limitar de alguna forma la intervención punitiva del Estado en razón de garantizar la protección de los derechos del imputado, esto es lo que concreta el sentido garantista de la investigación penal.

La fase de control a la que se ha hecho alusión aplica de manera parcial, esto es que atendiendo a la condición de que ningún derecho ni garantía o principio pueden ser aplicados de manera absoluta, esto es que la función de garantía dependerá de la forma en que se evalúe cada situación en concreto, ante esta situación se hace presente el examen de la proporcionalidad al momento de tomar decisiones respecto a lo que habrá de prevalecer. Bajo este lineamiento de acción es que se plantea este control sobre la propuesta de Gutiérrez, en tanto que debe existir una pauta que limite la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia como se sugiere, puesto que habrá condiciones de cada caso en particular bajo las cuales no podría concretarse dicha aplicación, esto último se relaciona con la disposición de derechos en función del nivel de lesividad del ilícito.

También se ha considerado como antecedente la investigación que construyó Hilazaca (2019), de cuyas determinaciones se ha podido establecer un cuestionamiento que dice: ¿Cómo debe interpretarse la formulación de la acusación fiscal?, respecto al planteamiento de este investigador es posible indicar que se ocupa de la correcta interpretación de los requerimientos de acusación fiscal en tanto que permite verificar su formulación, congruencia e idoneidad de la acción penal aplicada por el Ministerio Público; esta revisión se entiende ha de ser guiada por el control de los principios generales y procesales, con el fin de asumir una posición jurídica que garantice los intereses y derechos tanto de las partes que intervienen en el proceso penal así como de la sociedad en general.

El criterio jurisdiccional debe estar enfocado en los tres ámbitos que comprende su desarrollo, en principio desde una perspectiva normativa, esto es el carácter objetivo que asume el criterio del juez, el mismo que se dirige a la aplicación directa de la norma. Además de ello se tiene el ámbito de interpretación que asume el criterio del juzgador, así se presenta como principal fundamento de evaluación el principio pro homine que propende la garantía de los derechos que le corresponde al ser humano como individuo social.

Sobre esto es importante señalar que existe una posibilidad de entender la interpretación de la terminación anticipada como una sentencia de conformidad que tal vez tendría el mismo sentido, pero que bien podría reforzarse el resultado si es que ello se diera en razón de un acuerdo que tenga como resultado el resarcimiento

del daño generado por la acción delictiva. Esto sería un correcto criterio para adaptar la terminación anticipada en el campo de otras fases previas al juicio oral, que para lo señalado en la investigación sería factible que se produzca en la etapa intermedia, con el fin de garantizar la celeridad y economía procesal.

Lama (2020) ¿De qué manera se puede corroborar que se elimina la congestión procesal?, el tema de la carga procesal siempre ha sido la más concurrente característica del proceso penal así como otras áreas del sistema de justicia debido a la gran cantidad de casos que son atendidos cuyos ingresos se producen a diario. Es importante considerar como factores que determinan este tipo de fenómeno a la insuficiente cantidad de juzgados o personal humano para que se produzca una atención idónea en cuanto a plazos para todos los usuarios del sistema.

Cabe señalar que en gran parte también la concurrencia de expedientes en el sistema de justicia sobre todo en el ámbito penal se debe también a la falta de celeridad en que son atendidos cada uno de los procesos, sobre todo en los que converge la capacidad de los órganos competentes, lo ideal es que se desarrolle un proceso efectivo, en el que se aprecie un verdadero trabajo de parte de los operadores de justicia que debe partir de la propia labor de jueces y fiscales.

Para el caso de la terminación anticipada que se desarrolla como una alternativa de solución de conflictos es importante cuestionar ¿Qué principios se materializan con la terminación anticipada en la etapa intermedia? Sin duda alguna

la participación de los principios en el desarrollo de la actividad jurisdiccional resulta de mucha trascendencia, lo cual opera como un mecanismo de control respecto a la aplicación del derecho ante la existencia de casos difíciles, puesto que siendo reglas *ut supra* o de un mayor rango que el resto de las leyes, se ocupan de controlar la salida jurídica que se le pueda dar a este tipo de circunstancias.

Para el caso de la terminación anticipada se entiende que se basa en el principio de oportunidad que se brinda al imputado con el fin de solucionar el conflicto generado con su acción ilícita, ello en tanto que se produce en razón de un acuerdo arribado con el Fiscal de la investigación penal, lo cual se materializa con la aprobación del mismo en función a la reducción de la sanción básicamente como beneficio de la justicia negociada que se aplica con el fin de evitar mayor dilación en el desarrollo de la investigación.

Otro de los principios que se materializan con la aplicación de la terminación anticipada es el de celeridad y economía procesal, estos en tanto se evidencia el factor de control de plazos para el primero, esto es que las actuaciones procesales durante la investigación se produzcan en función a lo determinado por el propio esquema procesal; que en el caso del principio de economía procesal se advierte su materialización en tanto que se evitan actos procesales, puesto se produce el salto de las secuencias para pasar directamente al juzgamiento, lo cual resulta beneficioso para el sistema de justicia puesto que se descarga de sus obligaciones de atender los casos que son más sencillos de resolver.

Otro aspecto importante que debe ser tocado es lo referente a la configuración de la etapa intermedia, así se tiene que cuestionar ¿En esta etapa intermedia se sanea las razones que originan los actos para investigar el origen del delito?, desde luego que para el desarrollo adecuado de la fase intermedia debe haber alcanzado un nivel de saneamiento procesal, lo cual debe dejar en claro la razón o razones por las cuales se da inicio a la investigación, la correcta determinación del imputado es una identificación que resulta de trascendencia, ello en tanto que permitirá luego la vinculación con el hecho delictivo, el mismo que debe estar correctamente tipificado, permitiendo así la subsunción de los hechos en el tipo penal que encaja más adecuadamente según los hechos fácticos.

Una de las principales razones por las que se desarrollan las fases o etapas en el proceso penal es la necesidad de hacer más lógico y descargar la función del juez que evalúa cada uno de los actos según la fase en la que se encuentra el proceso, así se tiene que para el caso de esta segunda fase debe cuestionarse ¿Cuál es la naturaleza jurídica que se le atribuye a la fase intermedia?, la naturaleza de esta fase está vinculada con la finalidad que debe cumplir, en tal sentido se entiende que la principal característica de esta fase es la de establecer el control de la acusación que es planteada por el Ministerio Público, en tal sentido la adopción de medidas en el tramo de revisión resulta viable a fin de propiciar un mejor conocimiento de la realidad fáctica para el juzgador y con ello pueda aplicarse correctamente los

parámetros que determinan incluso la terminación anticipada como una posibilidad de solución de conflictos.

Es preciso también hacer una interrogante orientada al reconocimiento de las acciones previas que se desarrollan en el campo de la investigación penal, lo cual consolidará el sentido del proceso penal que ha de darse inicio, es así que se pregunta ¿A qué se refiere que las situaciones de controversia deben estar basados en antecedentes de investigación?

El desarrollo de la investigación previa precisa de la existencia de medios que permitan corroborar en la realidad la existencia de los elementos que permitan concebir ciertas acciones dentro del marco de la ilicitud que describen los tipos penales; en tal sentido corresponde señalar a este tipo de elementos como los antecedentes de investigación, siendo la función específica de estos el mostrar la existencia de un conflicto generado por la acción ilícita, ello en tanto que vulnera derechos de otras personas que se perciben como víctimas en penal.

Ahora bien, respecto a la función o finalidad de la terminación anticipada conviene cuestionar ¿Por qué si se solicita en etapa intermedia no podría aplicarse en sus propios términos el artículo 471 de CPP al no cumplir con su finalidad de política criminal?, cabe indicar que la construcción de la política criminal depende de la orientación que adquiera según la gestión estatal, para tal fin debe primar la preocupación del Estado para reconocer en la realidad social los principales

problemas que requieren atención, como es en función al tema estudiado, las condiciones de la criminalidad, tanto como un factor que debe ser atendido para prevenirla así como aquello vinculado con la seguridad ciudadana que debe garantizarse a la población.

Según lo explicado se llega a la idea de que la política pública orienta el contenido de la legislación, que para este caso se refiere a las reglas punitiva y el proceso que debe seguir la investigación, lo que permite establecer un marco de legalidad para el desarrollo del proceso penal, es así que la finalidad que debe alcanzar respecto al tema de la terminación anticipada esta relacionada con las bases de la justicia negociada, que surge de la propia necesidad de otorgar oportunidad a quien ha incurrido en actos presuntamente ilícitos más por una cuestión de culpabilidad antes que por la propia intención de cometerlos.

Siendo así, resulta de interés la aplicación adecuada de la terminación anticipada en tanto que en base a la condición volitiva del agente delincuencia para llegar a un acuerdo, conlleva al premio por esta posición, lo cual se traduce en la disminución de la sanción, que además implica una característica esencial relacionada con la disminución de las fases procesales, puesto que el salto producido como efectos de esta sanción es lo que justifica cualquier favor otorgado al imputado, básicamente por que se favorece el cumplimiento de la celeridad y economía procesal como controladores de esta fase del proceso penal.

Esta necesidad de control tiene su respaldo en la aplicación propia del derecho que se ha construido como parte de la estrategia estatal, lo cual esta en manos de los magistrados del Poder Judicial, puesto que a ellos les corresponde aplicarlo, es así que para el desarrollo de esta actividad se recurre a la interpretación legislativa, sobre todo interesa la posibilidad interpretativa por extensión o la restrictiva, es así que se cuestiona ¿A qué se refiere la interpretación restrictiva de derechos?

Según lo cuestionado respecto a la interpretación restrictiva de derechos, conviene señalar que también se estaría refiriendo a la interpretación de las reglas que contienen, describen o amparan los derechos de las personas, es así que la participación interpretativa cubre aspectos no contemplados de manera directa en estas reglas y que son de utilidad para comprender el verdadero sentido de la ley. Siendo así la interpretación restrictiva que se conoce también como extensiva pretende obtener un resultado apoyándose de cualquier medio para alcanzar el fin esperado respecto del sentido de la ley, en principio se recurre a los orígenes de la misma, como es el caso del proyecto que la llevó a formar parte del ordenamiento jurídico.

Es así que la función jurisdiccional respecto a este tipo de interpretación tiene ciertas libertades en la búsqueda de justificaciones según lo que se entiende cuando menos como una probabilidad, sobre todo en el caso de superposición de reglas; es posible también alcanzar este tipo de interpretación en función al probable

propósito de la regla, pudiendo enfocarse en el resultado de la analogía para resolver las controversias que no pueden ser atendidas con la propia Ley (Mantilla, 2009) .

Como se puede apreciar se trata de la posibilidad de realizar una adecuada interpretación de las reglas que contienen los derechos con el fin de alcanzar resolución de conflictos; en tal sentido para el caso estudiado, saber si es posible interpretar restrictivamente la regla que limita la acción de la terminación anticipada para cierta etapa del proceso penal. Corresponde esto a un tipo ¿Qué es derecho de acción frente al poder deber de la jurisdicción?

A fin de responder tal cuestionamiento es menester señalar que la acción se constituye en la base del proceso en general que posee autonomía en su carácter científico, que unida a la jurisdicción y el proceso mismo se constituyen en el pilar de la estructura disciplinaria procesal o adjetiva. Como tal la acción se consolida como un tipo de poder que desde la perspectiva política de la organización del Estado se atribuye a los miembros de la sociedad para acudir a la judicatura a fin de que se componga un litigio que sirva para dilucidar o atender su derecho vulnerado o afectado.

Frente a ello se advierte la participación del poder deber que le corresponde a la jurisdicción, esto es que se convierte en una potestad de control otorgada a los operadores de justicia que integran el sistema a fin de atender los pedidos de quienes acceden a la tutela, esto último es lo que permite ver el sentido de obligación que

tienen para respaldar el sistema de justicia con la intervención del ordenamiento jurídico (Montilla, 2008).

TOMA DE POSTURA:

En base a la discusión desarrollada que observa los fundamentos jurídicos para la terminación anticipada durante la etapa intermedia en el ordenamiento procesal penal se ha tenido como resultado al control que se supone deben ejercer los principios de celeridad y economía procesal, en base a lo cual se justifica la intervención de la justicia negociada pudiéndose arribar a un acuerdo sobre los aspectos más importantes como son la sanción penal y la reparación del daño.

Estas características son las que se presentan como fundamentos que justifican la participación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, lo cual puede ser trasladado a cualquier etapa del proceso penal, en tanto que la función de control que ejercen los principios generales y procesales se vinculan hacia un mismo fin que es la búsqueda de la verdad para que sobre ella intervenga el ius puniendi para aplicar una sanción o determinar la inocencia del imputado.

El condicionamiento para el desarrollo de la actividad procesal depende de la existencia de controles normativos, esto implica que la regulación de la terminación anticipada tiene un respaldo constitucional como de igual manera lo

tiene la etapa intermedia como parte del proceso penal, lo cual debe servir de guía para reconocer la necesidad de establecer restricciones. Para el caso estudiado existen restricciones normativas que solo permiten desarrollar terminación anticipada en la etapa de investigación preliminar, lo cual no resulta del todo adecuado puesto que no existen incompatibilidades jurídicas válidas para evitar que se produzca en la etapa de la etapa intermedia.

5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Estudiar el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva como parte del control del proceso penal peruano”

Esta parte de la investigación tiene que ver con la forma en que se han desarrollado los derechos fundamentales resultantes de las garantías constitucionales, las cuales sirven luego de guía para el control de la actividad jurídica desarrollada sobre todo en el ámbito del derecho penal que supone la existencia de un esquema de corte garantista, que propende la protección de los derechos fundamentales.

Es importante por ello el análisis de los mecanismos que permiten una protección constitucional en función a la tutela que se presume del sistema de justicia destinado a la garantía de los derechos de las partes que intervienen en el proceso penal, debe considerarse también que existe un contenido especial para la comprensión de la tutela lo cual incorpora además otros derechos como son el debido proceso que se traduce en el acceso al sistema mediante los mecanismos correspondientes.

Es importante considerar las funciones de la tutela jurisdiccional efectiva que se produce así en tanto que la acción incorpora otros elementos que contiene tal derecho, por lo cual se debe cuestionar ¿Cuáles son los componentes de este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?, tal cual se ha indicado anteriormente, la tutela jurisdiccional efectiva se comporta jurídicamente como un derecho

continente puesto que incorpora para su desarrollo otros derechos como es el debido proceso, el cual se convierte en uno de los elementos que permiten que sea viable, en tanto que se controla su ejecución en razón del cumplimiento de las fases del proceso penal.

Lo señalado deja en claro cuando menos dos aspectos que deben asumirse como el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva, primero al propio acceso al sistema de justicia que permite a los sujetos acceder a dicho sistema para reclamar o hacer valer sus derechos afectados, así como el segundo contenido que se orienta hacia la participación el debido proceso como control de las actividades que se desarrollan en dicho proceso penal. Esta consolidación de elementos es lo que viabiliza la existencia de efectividad en el desarrollo de la tutela como derecho (Zuñiga, 2015).

Sin duda la materialización de este contenido es lo que permite alcanzar justicia, ello en tanto se haya producido en virtud del adecuado control de la actividad jurisdiccional, vale decir que existe una razón de ser para establecer parámetros, que será el control del poder otorgado por el Estado, esta acción jurisdiccional debe ser limitada a fin de evitar el abuso o arbitrariedad en la ejecución del proceso, por lo mismo que se interroga ¿Cuál es la meta de ejecución que permiten alcanzar materialmente la igualdad?

Como bien se conoce sobre la igualdad se perciben condiciones específicas destinadas a la consecución del equilibrio social, esto quiere decir que el tratamiento que se otorga a los justiciables mediante el sistema de justicia debe ser idóneo a fin de evitar circunstancias de discriminación. Desde luego el desarrollo normativo siempre se enfoca en razón de esta pauta jurídica, teniendo en cuenta también las limitaciones existentes para su ejecución, como es el caso de que la descripción de igualdad se guía por el aforismo de igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales.

Lo señalado implica el reconocimiento de la diversidad que envuelve a la realidad jurídica, esto es que las situaciones o condiciones diseñadas en el ordenamiento jurídico se enfocan en el equilibrio social basados en la igualdad, en tanto se encuentre esta condición previa para aplicarla. Esto quiere decir que para aplicar de manera igualitaria la Ley se precisa de una condición previa de aquellos sujetos que participan accediendo al sistema, que posean un nivel de igualdad de condiciones, solo así se procede a la aplicación de las reglas, incluso el mismo factor es el que prima para la construcción de las mismas. Solo en base a esta condición es que se puede establecer un régimen de igualdad, puesto que si las condiciones previas no existieran el mismo ordenamiento además de injusta sería arbitraria su aplicación.

TOMA DE POSTURA

Tal cual se ha podido discutir sobre el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva como parte del control del proceso penal peruano, se advierte que existe

una función controladora atribuida a los principios del derecho, que para el caso del proceso penal intervienen de manera directa no solo en la creación de las propias reglas sino también en la aplicación de las mismas, todo ello con la intención de establecer un efecto de seguridad jurídica y equilibrio en el sistema de justicia, sobre todo en el ámbito penal en que se pone en discusión sobre la responsabilidad de los sujetos que puede alcanzar vulneración de la libertad personal.

Es importante considerar el hecho de que la razón de ser de un sistema de justicia es precisamente propiciar las condiciones para poder alcanzarla, para tal efecto se han creado mecanismos específicos que motivan un adecuado desarrollo del proceso penal, siendo el principal fundamento de estas razones la necesidad de brindar un adecuado acceso así como la secuencia apropiada del proceso de una forma debida según los parámetros procesales y bajo el control constitucional que opera sobre el derecho penal.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la realidad jurisdiccional respecto a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en las investigaciones penales del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo”

Teniendo en cuenta el sentido de la investigación cabe cuestionar ¿Cuál es la finalidad del análisis proyectado?, la finalidad de esta investigación busca determinar el efecto que produce la restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia sobre la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano, es que se ha considerado como meta de análisis verificar la realidad jurisdiccional que se produce en el distrito judicial de Lambayeque, específicamente con atención en la ciudad de Chiclayo. Para tales efectos de la muestra se ha podido indicar de manera puntual la revisión de 10 casos judicializados en los que se haya producido la terminación anticipada en el ámbito del proceso penal.

La revisión de esta muestra tiene la intención de observar el nivel de eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva, la misma que al ser revisada en su ámbito de acceso denota una característica óptima puesto que permite la participación de la justicia penal negociada, dado que se presenta la posibilidad para el imputado de acceder a un acuerdo que brinde beneficio respecto a la sanción que se le impondrá y que también otorga la posibilidad de que el daño sea resarcido en sus efectos.

Para los efectos de la obtención de material para la observación jurisdiccional es que se ha recurrido a la institución jurisdiccional para solicitar el acceso a la información pública que comprende los expedientes judiciales, los

cuales han permitido ubicar a la muestra planteada inicialmente y sobre ello desarrollar la observación de la realidad jurisdiccional. Esta labor se ha orientado al reconocimiento del criterio sobre la funcionalidad de la terminación anticipada en el proceso penal.

El resultado de esta solicitud ha sido el acceso a la data que ha servido para seleccionar el material idóneo que muestre el carácter de eficacia que ostenta esta figura jurídica con especial atención a sus efectos positivos para verificar la posibilidad de aplicarla en el ámbito de la etapa intermedia del proceso penal; por lo mismo que la actividad jurisdiccional se revisa en función a la manera en que se evalúa el pedido del Ministerio Público, vale decir los criterios adoptados por la jurisdicción que permitan ver la viabilidad del acuerdo.

Esta ruta de análisis proyecta verificación de las circunstancias de la realidad para reconocer la verdad con el fin de establecer una determinación sobre el nivel de responsabilidad de los imputados, en esta ruta se verifica la necesidad de establecer un marco de control sobre el ejercicio del poder punitivo. Esto último sería uno de los principales fundamentos para que sea incorporada la terminación anticipada como mecanismo que forma parte de la justicia negociada y que conlleva a un desarrollo procesal penal más célere.

En razón a la eficacia advertida de la documentación se considera inapropiada la restricción de la terminación anticipada limitando la posibilidad de

su realización en etapa intermedia, puesto que afecta negativamente sobre la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano, para determinar ello se ha tenido que partir por el punto de observación sobre la eficacia que se denota al aplicar la terminación anticipada en el proceso penal. En tal sentido es que se ha podido recopilar las resoluciones que contienen las actas de control de acusación y la terminación anticipada que formulada adecuadamente como acuerdo debidamente consensuado, finalmente logra su cometido.

Según lo recogido de la actividad jurisdiccional es posible reconocer un beneficio no solo procesal sino también de corte garantista, que se proyecta como una suerte de evitar el desarrollo innecesario de fases procesales que por las condiciones y circunstancias de cada caso pueden ser limitadas con el pase directo al juicio oral. Esto explicado sobre el campo procesal resulta muy favorable puesto que se traduce en el control de los principios de celeridad por la cuestión del adecuado cumplimiento de plazos y del principio de economía procesal que se rescata por el ahorro de etapas procesales, permitiendo llegar al juicio oral de manera directa.

Es importante denotar esta actividad de control el mismo que atendiendo las características de garantismo deben ser trabajadas desde la perspectiva constitucional que estará a cargo de los principios, siendo así en torno a la tutela judicial como principio general, incorpora otros mecanismos de control como el debido proceso que apertura la posibilidad de ejercer el derecho a esta justicia

negociada en cualquiera de las fases del proceso penal, por lo mismo que la terminación anticipada podría tener una liberación de las restricciones establecidas a fin de establecer como posibilidad a que sea aceptada aún en la etapa intermedia.

TOMA DE POSTURA:

Luego de la discusión en torno a la realidad jurisdiccional respecto a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en las investigaciones penales del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo, se puede señalar que se produce un acceso adecuado a la terminación anticipada, lo cual dota de efectividad al proceso penal en tanto que proyecta garantismo, celeridad y economía procesal; que atendiendo además las condiciones de revisión que ocupa esta etapa y que podría asumirse en cualquier otra del proceso penal, es que resulta viable la aplicación de la terminación anticipada en cualquiera de ellas con el único límite que se dé previo al juicio oral.

El condicionamiento de la actividad procesal se basa en el principio de legalidad por lo mismo que solamente podrá aplicarse esta figura en tanto se encuentre taxativamente incorporada en la legislación, pero pese a ello, las condiciones de la realidad procesal permiten ver que la actividad realizada en la etapa intermedia no pasa de ser un filtro de actividades preliminares para ser trasladadas a la etapa de juzgamiento, por lo mismo que el control no siempre resulta del todo idóneo, siendo así la restricción que limita la terminación anticipada podría anularse a fin de que se produzca también en esta etapa no, puesto que el

acceso que representa la tutela jurisdiccional faculta a que pueda ser en cualquier fase, limitándose como es común hasta antes del juicio oral.

5.2. Validación de las variables:

El ejercicio de validación comprende en la síntesis de los resultados tanto de la discusión así como de la observación de la realidad en torno a la efectividad de la terminación anticipada primero y luego sobre el tema de los efectos que produce la restricción de su aplicación únicamente aceptada en la etapa intermedia, ello con el fin de establecer un criterio o postura propia sobre la posibilidad de retirar tal restricción del esquema procesal a fin de extender los efectos aplicativos de la terminación anticipada.

5.2.1. Validación de la variable independiente: “La restricción de la terminación anticipada en etapa intermedia”

Para la verificación de la validez de esta variable, la misma que debe reconocerse como aquel concepto que denota el origen del problema planteado, resultó necesario el recojo de la información obtenida mediante el análisis jurídico e interpretativo de las reglas que intervienen como restricción para la aplicación de la terminación anticipada, dejando como única posibilidad de ser planteada en la etapa intermedia.

Existen sin duda bases jurídicas que sirven de fundamento para la terminación anticipada durante la etapa intermedia en el ordenamiento procesal

penal, teniendo como resultado al control que se supone deben ejercer los principios de celeridad y economía procesal, en base a lo cual se justifica la intervención de la justicia negociada pudiéndose arribar a un acuerdo sobre los aspectos más importantes como son la sanción penal y la reparación del daño.

Debe dejarse en claro que la eficacia de esta figura jurídica depende de los acuerdos a los que se arriben, siempre teniendo en cuenta el sentido de protección que debe asistir tanto al imputado, así como a la víctima como partes del proceso penal y que no resulta apropiado si no se controla en base a los principios que guían el garantismo penal. Esta figura principalmente tiene su base en el principio de oportunidad el cual se orienta hacia la posibilidad de otorgar como opción al imputado, aquel arrepentimiento que debería formar parte del inicio de su proceso de resocialización.

Puede señalarse entonces que la participación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal se encuentra justificada, lo cual puede ser trasladado a cualquier etapa del proceso penal, en tanto que la función de control que ejercen los principios generales y procesales se vinculan hacia un mismo fin que es la búsqueda de la verdad para que sobre ella intervenga el ius puniendi para aplicar una sanción o determinar la inocencia del imputado.

En razón a las indicaciones previas se ha de considerar como validada la variable independiente bajo la siguiente indicación:

La restricción de la terminación anticipada es inadecuada puesto que se puede producir también en etapa intermedia.

5.2.2. Validación de la variable dependiente: “La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano”

El sentido que adopta esta variable es la concepción de los efectos o consecuencia del problema que se ha planteado, esto esta en función a la variable anterior referida a la restricción para la aplicación de la terminación anticipada, lo que se pretende revisar entonces es si es que esta medida restrictiva opera como un elemento limitante del acceso a la tutela jurisdiccional o si en todo caso limita su efectividad.

Es evidente que la tutela jurisdiccional efectiva forma parte del control del proceso penal peruano, se advierte que existe una función controladora atribuida a los principios del derecho, que para el caso del proceso penal intervienen de manera directa no solo en la creación de las propias reglas sino también en la aplicación de las mismas, todo ello con la intención de establecer un efecto de seguridad jurídica y equilibrio en el sistema de justicia, sobre todo en el ámbito penal en que se pone en discusión sobre la responsabilidad de los sujetos que puede alcanzar vulneración de la libertad personal.

La protección de los derechos resulta de valía en tanto que la seguridad jurídica se presume como el resultado idóneo de la intervención del Estado en las relaciones particulares con el fin de controlarlas, lo cual precisa de una justificación que sin duda es la de control de la seguridad ciudadana, por lo mismo es que se presentan ciertas limitaciones o restricciones, pero tales acciones deben estar debidamente justificadas a fin de no convertirse en vulneración de derechos. Como tal la participación de la simplificación procesal resulta del todo efectiva en tanto no se extralimite en sus facultades tanto los operadores de justicia así como las propias partes que intervienen en el proceso penal.

Para el desarrollo adecuado del proceso penal se han creado mecanismos específicos que motivan un adecuado desarrollo del proceso penal, siendo el principal fundamento de estas razones la necesidad de brindar un adecuado acceso así como la secuencia apropiada del proceso de una forma debida según los parámetros procesales y bajo el control constitucional que opera sobre el derecho penal.

Es por ello importante conocer si realmente existe un sentido de eficacia en la aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva en los procesos penales del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo, observación que ha permitido verificar que se produce un acceso adecuado a la terminación anticipada, lo cual dota de efectividad al proceso penal en tanto que proyecta garantismo, celeridad y economía procesal; que atendiendo además las condiciones de revisión que ocupa

esta etapa y que podría asumirse en cualquier otra del proceso penal, es que resulta viable la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia con la salvedad de que se produzca de manera previa al juicio oral.

De acuerdo a los parámetros establecidos por la legalidad como principio debe ceñirse el acto procesal a lo establecido en la regla, por lo mismo que solamente podrá aplicarse esta figura en tanto se encuentre taxativamente incorporada en la legislación, pero pese a ello, las condiciones de la realidad procesal permiten ver que la actividad realizada en la etapa intermedia no pasa de ser un filtro de actividades preliminares para ser trasladadas a la etapa de juzgamiento, por lo mismo que el control no siempre resulta del todo idóneo, siendo así la restricción que restringe la terminación anticipada en esta etapa no resulta apropiada en su totalidad, pudiendo ser en cualquier fase, limitándose como es común hasta antes del juicio oral.

De acuerdo a lo señalado anteriormente es posible indicar que la variable dependiente termina validándose bajo la siguiente afirmación:

El acceso a la tutela jurisdiccional efectiva se controla mediante la intervención de los principios en el proceso penal peruano

5.3. Contrastación de la hipótesis

5.3.1. Determinación final:

La restricción de la terminación anticipada es inadecuada puesto que se puede producir también en etapa intermedia con lo cual se estaría asegurando el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva que se controla mediante la intervención de los principios en el proceso penal peruano.

Tabla 2: cuadro de contrastación de hipótesis

Hipótesis inicial	Determinación final
La restricción para aplicar la terminación anticipada en etapa intermedia produce alteración de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal peruano.	La restricción de la terminación anticipada es inadecuada puesto que se puede producir también en etapa intermedia con lo cual se estaría asegurando el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva que se controla mediante la intervención de los principios en el proceso penal peruano

Conclusiones

Conclusión general

Se ha determinado que la restricción de la terminación anticipada es inadecuada puesto que se puede producir también en etapa intermedia con lo cual se estaría asegurando el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva que se controla mediante la intervención de los principios en el proceso penal peruano.

Conclusiones específicas

Primera:

Se concluye respecto a los fundamentos jurídicos para la terminación anticipada durante la etapa intermedia en el ordenamiento procesal penal, que los principios de celeridad y economía procesal justifican la intervención de la justicia negociada pudiéndose arribar a un acuerdo afectando la sanción penal y la reparación del daño. Fundamentos que sirven en cualquier etapa del proceso penal, en tanto que la función de control que ejercen los principios generales y procesales se vinculan hacia un mismo fin que es la búsqueda de la verdad para que sobre ella intervenga el ius puniendi para aplicar una sanción o determinar la inocencia del imputado.

Segunda:

Se concluye en función al contenido de la tutela jurisdiccional efectiva como parte del control del proceso penal peruano, que los principios del derecho

intervienen directamente en la creación de las reglas y su aplicación logrando con ello seguridad jurídica y equilibrio en el sistema de justicia; para tal fin existen mecanismos específicos que motivan un adecuado desarrollo del proceso penal, facilitando el acceso así como la secuencia apropiada del proceso de una forma debida según los parámetros procesales y bajo el control constitucional que opera sobre el derecho penal.

Tercera:

Se concluye en base al análisis de la realidad jurisdiccional respecto a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en las investigaciones penales del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo, que en el proceso penal se produce un acceso adecuado a la terminación anticipada, con garantismo, celeridad y economía procesal, lo cual puede darse en cualquiera de las fases procesales; siendo así, la restricción que limita la terminación anticipada a la investigación preparatoria no resulta apropiada en su totalidad, pudiendo darse en cualquier fase, limitándose como es común hasta antes del juicio oral.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda al Poder Judicial mayor control de la actividad jurisdiccional, que permita establecer una revisión de la efectividad de la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto que no todas las figuras jurídicas y sus restricciones pueden resultar adecuadas, ello en tanto que los límites deben salvaguardar el ejercicio de los derechos de las partes, que para este caso estudiado se ha verificado una limitación innecesaria respecto a la terminación anticipada.

Segunda:

Se sugiere la modificación de los artículos pertinentes que permitan la correcta ejecución de la terminación anticipada sin vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, los cuales deben ser:

Modificar el artículo 468 del ordenamiento procesal penal en su numeral primero que marca las forma en que se aplica la terminación anticipada en el proceso penal, el cual debería señalar: “1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la investigación preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 **y hasta antes que se produzca la audiencia de control de la acusación fiscal**, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. Se formará al respecto, cuaderno aparte”.

Bibliografía

- Álvarez, H. (2014). El derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del derecho civil: supuestos más relevantes. *Revista europea de derechos fundamentales*(23), 27-51. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4945866.pdf>
- Araujo, R. (2011). *Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado*. Bogotá D.C: Universidad del Rosario.
- Caro, D. (2006). Las garantías constitucionales del proceso penal. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 1027- 1045. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08047-30.pdf>
- Cruz, D. (14 de Agosto de 2021). ¿Es posible la incoación de la terminación anticipada durante la etapa intermedia? Huánuco.
- Cubillo, I. (2018). El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la ejecución en la jurisprudencia constitucional. *Estudios de Deusto*, LXVI(2), 447-372. Obtenido de <https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1531/1861>
- Gutierrez, J. (2019). *La aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano*. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
- Hilazaca, R. (2019). *La terminación anticipada como mecanismo de solución de conflictos y acceso a la tutela procesal efectiva, en la etapa intermedia,*

Arequipa, 2017-2018. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Lama, D. (2020). *La terminación anticipada en la etapa intermedia: una reforma necesaria.* Piura: Universidad Nacional de Piura.

Landa, C. (2016). La constitucionalización del derecho procesal penal: El nuevo código procesal penal peruano en perspectiva. *Thémis*(68), 181-191. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5727620.pdf>

Mantilla, F. (2009). Interpretar: ¿aplicar o crear derecho? análisis desde la perspectiva del derecho privado. *Revista de Derecho Valparaíso*(33), 537-597. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512009000200015

Martín, F. (2014). Del derecho a la tutela judicial efectiva hacia el derecho a una tutela efectiva de la justicia. *Revista Europea de Derechos Fundamentales*(23), 161-176. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4945876.pdf>

Martinez, P. (2021). La idoneidad de la técnica procesal: una relectura de la tutela jurisdiccional efectiva. *Revista de Derecho - Universidad de Concepción*(250), 293-331. Obtenido de <https://www.scielo.cl/pdf/revderudec/v89n250/0718-591X-revderudec-89-250-293.pdf>

- Montilla, J. (2008). La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda. *Cuestiones Jurídicas. Universidad RAfael Urdaneta, II(2)*, 89-110. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1275/127519338005.pdf>
- Principe, H. (2009). La etapa intermedia en el proceso penal peruano: su importancia en el Código Procesal Penal de 2004 y su novedosa incidencia en el Código de Procedimientos penales (CdePP). *La reforma del derecho penal y el derecho procesal penal en el Perú. Anuariol de Derecho Penal*, 235-254. Obtenido de https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2009_12.pdf
- Ramírez, D. (2017). Tutela judicial efectiva: El reto de la justicia de pequeñas causas. *Revista de la maestría en Derecho Procesal- PUCP, VII(1)*, 14-44. Obtenido de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/19176/19367>
- Sanchez, J., & Zapata, R. (2022). La fase oral de la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio. *Revista de Ciencias Sociales(80)*, 57-87. Obtenido de <https://revistas.uv.cl/index.php/rccs/article/view/3320>
- Vera, J. (2017). Naturaleza jurídica de la fase intermedia del proceso penal chileno. Un breve estudio a partir de elementos comparados. *Revista de Derecho (Valparaíso)(49)*, 141-184. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1736/173654482004.pdf>

Zamora, M. (2014). La búsqueda de la verdad en el proceso penal. *Acta académica*(54), 147-186. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33626.pdf>

Zuñiga, J. (2015). *Defensa pública y acceso a la justicia constitucional de personas en situación de vulnerabilidad económica*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36882.pdf>

Anexos

Anexo 1: Carta del Sistema de Información Judicial



Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
Gerencia de Administración Distrital
Unidad de Servicios Judiciales

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Chiclayo, 18 de Agosto del 2023

CARTA N° 000131-2023-USJ-GAD-CSJLA-PJ



Firmado digitalmente por
SALDARRIAGA SALAS Marilu FAU
20487572319 soft
Jefe De Unidad De Servicios
Judiciales Calle
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.08.2023 16:03:39 -05:00

Señor

VILLANUEVA DIAZ LUIS ALBERTO - DNI: 41058061
Notificación : lvillanuevad@unprg.edu.pe

Asunto : Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Referencia : EXPEDIENTE001520-2023-USJ-GA

De mi consideración:

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y, asimismo, dar respuesta a su solicitud formulada al amparo del TUO de la Ley n° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual solicitó información consistente en "(...) números de expedientes que hayan concluido con sentencia de terminación anticipada en los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en los períodos enero 2022 a julio de 2023"

A fin de atender su solicitud, se requirió al área poseedora de la información (Coordinación Logística y administración del Módulo Penal Central); motivo por la cual las referidas dependencias remitieron reportes estadísticos de expedición de sentencias de terminación anticipada, así como el listado y/o numeración de expedientes judiciales que contiene sentencias de terminación anticipada emitidas en los períodos 2022 a julio de 2023" en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Se adjunta al presente la información solicitada.

Sin otro particular, me despido cordialmente

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

MARILU SALDARRIAGA SALAS
Jefe de Unidad de Servicios Judiciales CSJLA
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

MSS/hda



Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: <https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd> CÓDIGO: 550738 CLAVE: YCJGK6
CARTA N° 000131-2023-USJ-GAD-CSJLA Página 1 de 1

